TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala Civil-Familia

Bogotá D.C., veintitrés de febrero de dos mil veintiuno
Expediente: 25000-22-13-000-2020-00368-00

Se decide sobre la solicitud de cambio de radicación elevada por QGO Trade S.A. respecto del proceso declarativo verbal de responsabilidad civil contractual que promovió en contra de Tigre Colombia S.A.S., el cual cursa en el Juzgado Civil del Circuito de Funza (rad. 2018-00808-00).

ANTECEDENTES

1.- Con sustento en la causal 8° del artículo 30 del Código General del Proceso reclamó la empresa actora el cambio de radicación del aludido expediente y, en consecuencia, la remisión de la actuación a otro despacho judicial, con miras a que se continúe el trámite de la demanda y se culmine el juicio con una sentencia judicial pronta. A cuyo efecto adujo irregularidades en el actuar del juzgado implicado, *“que evidencian su deficiente gestión y celeridad”*, y comprometen *“los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”*, lo que ha implicado *“... retrasos y dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales... incumplimiento de los plazos y términos perentorios fijados por la ley para la adopción de decisiones judiciales... vulneración de los principios de seguridad jurídica, celeridad y eficiencia, [y] omisión del deber de velar y acatar los términos procesales”*.

Denunció puntualmente QGO Trade S.A. que radicó su demanda el 2 de mayo de 2018, esto es, hace 2 años, habiendo transcurrido un tiempo que va en contravía de lo dispuesto en el artículo 121 del C.G.P. -que contempló un término de un año para la duración de los procesos-, siendo que la primera actuación del juzgado fue surtida el 1° de octubre de 2018 y la última el 3 de diciembre de 2019, al proveer con excesiva tardanza sobre la concesión del recurso de apelación formulado contra el auto que rechazó la demanda. Explicó que en el tiempo que ha tenido el expediente la citada oficina judicial se ha tomado casi 1 año - desde el 11 de diciembre de 2018 cuando recibió el expediente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que determinó su competencia para conocer del asunto- para proferir autos de mero trámite sin que a la fecha, y luego de recibir el expediente por parte de este Tribunal, haya proferido el auto de admisión, en clara y abierta violación del artículo 120 del C.G.P.

Añadió que esta situación demuestra de manera clara la evidente deficiencia de gestión y celeridad por parte del juzgado implicado, ante la configuración de una flagrante e injustificada desatención del proceso y un evidente incumplimiento de los plazos y términos perentorios fijados por la ley para la adopción de las decisiones judiciales, lo cual entraña la trasgresión de derechos fundamentales. Señaló asimismo el fundamento jurídico de la petición de cambio de radicación y la posición jurisprudencial al respecto, argumentando finalmente que la congestión del sistema judicial no constituye una justificación válida para dejar de actuar con celeridad en los procesos.

2. Por auto de 15 de diciembre de 2020 se ordenó oficiar al Consejo Superior de la Judicatura con miras a que emitiera concepto de conformidad con el inciso final del artículo 30 de la Ley 1564 de 2012.

3. Mediante comunicación de 21 de enero pasado dicha corporación allegó el concepto reclamado. Fijó el alcance, reseñó los puntos fundamentales de la solicitud de cambio de radicación y puntualizó las normas que delimitan su actuar, enseguida de lo cual relató que obtuvo informe del despacho implicado en torno a la gestión y trámite adelantado dentro del proceso que suscitó la petición -cuyas explicaciones transcribió-, dando cuenta asimismo de que las estadísticas del juzgado de Funza en comparación con los demás despacho del circuito dentro de este distrito judicial -donde ocupa el primer lugar de procesos con inventario activo a 31 de diciembre de 2019, con 1.403 procesos-, con lo cual advirtió preliminarmente que se trata de un juzgado congestionado.

En ese sentido, conceptuó que *“el Despacho Judicial objeto de estudio presenta congestión por alta carga de trabajo, denotando visibles retrasos en cuanto al normal desarrollo de la gestión judicial, no siendo ello atribuible a quien regenta el Despacho judicial por actos de negligencia y/o desidia en lo relativo a sus deberes como juez...”*, siendo *“que pese a la cogestión judicial... aunado a la contingencia sanitaria surgida por el COVID -19, se ha realizado el mayor esfuerzo por dar trámite a cada una de las solicitudes elevadas...”* lo que denotaba *“una buena gestión en medio de tanta dificultad”*. Añadió que si bien la demanda se presentó desde el 18 de mayo de 2018, el tiempo desde entonces transcurrido no podría recaer en la funcionaria, pues según las pruebas allegadas se han presentado situaciones ajenas respecto de las cuales no son tiene absoluto control.

Aclaró que aunque se observaba un retraso que comprometería mandatos superiores, como el que impone la resolución pronta y en debida forma de las solicitudes procesales, no podía pasarse

por alto que mediante auto de 28 de junio la demanda se rechazó -ante la no corrección de las deficiencias anotadas-, y que la alzada se concedió el siguiente 3 de diciembre, denotándose que esa tardanza respondió al cierre del juzgado en el mes de marzo de 2019 por inventarios, que al final reportaron cerca de 1200 procesos al despacho para sustanciar. Además, aunque esta corporación en auto de 13 de marzo de 2020 revocó el proveído de rechazo, no fue sino hasta el 17 de septiembre de 2020 que arribó el expediente a la oficina *a-quo* para acatar lo resuelto por el superior.

Así, no obstante presentarse deficiencias de gestión y falta de celeridad, ellas han sido emendadas al dictarse el auto de 18 de enero de 2021, que en cumplimiento a lo resuelto por esta superioridad admitió la demanda y denegó las medidas cautelares pedidas, dándose de ese modo continuidad al trámite, no habiendo hoy actuación por impulsar. En suma, concluyó el Consejo Seccional *“que no se dan los supuestos para el cambio de radicación, toda vez que si bien... ha habido demoras en la prestación del servicio... se observa que no hay trámite pendiente por parte del Juzgado o alteración a las garantías procesales que le esté en la actualidad vulnerando derecho procesal alguno”*, acotando finalmente que para el municipio de Funza se ha dispuesto la creación del Juzgado Laboral del Circuito, para que asuma los procesos de esa naturaleza que hoy le competen al mencionado despacho judicial.

CONSIDERACIONES

1. Con arreglo en lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 31 del Código General del Proceso incumbe al tribunal zanjar el presente asunto, pues a éste se le ha atribuido la competencia para resolver “[d]e

las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 8° del artículo 30”.

Dicho lo cual, se tiene que acorde con la última disposición, “[e]l cambio de radicación se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. (...) La solicitud de cambio de radicación no suspende el trámite del proceso. (...) Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (se subrayó).

Pues bien, el contenido de tal enunciado normativo pone de manifiesto, con bastante claridad, las puntuales situaciones que pueden suscitar el cambio de radicación, amén de lo cual se advierte que para el buen suceso de este tipo de solicitudes no basta la mera invocación de alguna de las causales allí ínsitas, sino que es deber del interesado aportar los medios que sirvan para tener por estructurado el motivo o motivos que aduce; no por nada el legislador previo que “[a] la solicitud de cambio de radicación se adjuntarán las pruebas que se pretenda hacer valer (...)”, esto, evitando que una de las cuestiones de tanta trascendencia para el proceso, como la competencia territorial de las autoridades judiciales, quede sometida al arbitrio o al capricho de los litigantes.

2. Apuntadas tales premisas de orden general ve el tribunal cómo la solicitud de cambio de radicación *sub-júdice* estuvo fincada, fundamentalmente, en una presunta gestión deficiente y ausencia de celeridad frente a la acción judicial impulsada por la sociedad

demandante, por el hecho de haber transcurrido algo menos de dos años sin que se hubiera dispensado la admisión de la demanda, entre otros aspectos que en su sentir han aparejado el desconocimiento general de los términos procesales dispuestos en el C.G.P., obrando en el presente expediente suficientes elementos para proveer sobre la solicitud en comento, amén de contarse con el concepto previo que para estos casos le incumbe a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Pudiéndose notar con prontitud que el mentado pedido de la demandante no tiene posibilidad de prosperar en esta ocasión, todo porque no hay manera de endilgar al juzgado implicado entera responsabilidad por el acaecimiento de las situaciones que eventualmente han generado el retraso del juicio declarativo allí promovido, siendo que no se percibe intención manifiesta de la titular del despacho orientada a dilatar la actuación, descubriéndose verdaderamente que el trámite ha sido afectado por varios factores que de alguna manera justifican la censurada tardanza.

En efecto, como ha quedado decantado en el concepto previo emitido para el presente asunto y se corrobora en las piezas procesales arrimadas, el trámite judicial estudiado se ha visto resentido en su línea temporal: *i)* por el conflicto de competencia suscitado en el proceso desde sus albores, que implicó que el asunto retornada a la oficina de origen, apenas el 11 de diciembre de 2018; *ii)* por el cierre extraordinario de la oficina judicial de Funza con el propósito de determinar el inventario de sus procesos, lo que retrasó la concesión de la apelación frente a la providencia que rechazó la demanda; y, *iii)* porque pese a que esta Sala desató esa alzada el 13 de marzo de 2020, solo hasta el 17 de septiembre de esa anualidad arribó el expediente al despacho *a-*

quo para lo de su cargo, de seguro, a atención a que dentro de ese interregno mediaron sendas medidas de suspensión de términos y cierre de sedes judiciales, con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional.

A lo cual se suma, como un hecho determinante y de indiscutible relevancia, la ostensible congestión judicial que afecta y compromete el rendimiento del Juzgado Civil del Circuito de Funza, acreditada al tenor de las estadísticas que dan cuenta de los procesos que tiene en sus inventarios finales y de la contrastación de esos datos con los que reportan los despachos judiciales homólogos dentro del distrito judicial de Cundinamarca, viéndose que inclusive la carga laboral de aquél juzgado excede por más del doble la que tiene el juzgado que le sigue en orden según el número de asuntos, contexto que explica con creces las eventuales demoras que se vienen dando.

Desde luego, como lo ha entendido la jurisprudencia patria, *“la palabra gestión debe ser entendida como la concreción de todas aquellas acciones tendientes a lograr un resultado o asunto en especial. Y, por supuesto, en ese sentido, cuando el artículo 30.8, del CGP., alude a ‘deficiencias de gestión’... según las circunstancias particulares,... debe entenderse como la deficiente actividad en la consecución de los resultados finales de determinado trámite judicial”*¹, de esa suerte, para los casos de morosidad *“...es indispensable que determinada dilación o mora judicial sea injustificada, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso...”*² (se destacó).

¹ C.S.J. M.P. Margarita Cabello Blanco, exp. 2012-2646.

² T-604 de 1995.

Lo anterior resulta suficiente para colegir que los planteamientos de la demandante QGO Trade S.A. no alcanzan a subsumirse en el supuesto de “deficiencias de gestión y celeridad de los procesos”, invocado como motivo para procurar el cambio de radicación y la remisión del expediente a otra oficina judicial, tanto más si se advierte que de cara al proceso se ha dispensado ya el auto de admisión, siguiendo el curso natural que procesalmente se impone, razón de más para resolver del modo señalado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, resuelve:

PRIMERO: Denegar la solicitud de cambio de radicación incoada por QGO Trade S.A. respecto del proceso declarativo verbal de responsabilidad civil contractual que promovió en contra de Tigre Colombia S.A.S., el cual cursa en el Juzgado Civil del Circuito de Funza (rad. 2018-00808-00).

SEGUNDO: Comuníquese esta decisión al interesado y al mencionado juzgado.

TERCERO: Para la resolución del presente asunto se conformó el respectivo expediente virtual, ello, siguiendo el protocolo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 y acorde con lo señalado en la Circular PCSJC20-27, ambos del Consejo Superior de la Judicatura. Dicho expediente podrá ser consultado a través del siguiente link: <https://etbcsj->

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jlondons_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eue5adqjvFVKluPqD8R_pG8BE-7eSVWRgtYYKvpY8iQfkA

Notifíquese y cúmplase,

Firmado Por:

**JAIME LONDONO SALAZAR
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 003 CIVIL - FAMILIA DE CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**619033d46bb4c3712beda655a6b514a7d0cd580d7ad8fe2c9564cfc0557
988f1**

Documento generado en 23/02/2021 09:44:43 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**